



PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2017-2018

WALTER VÉLEZ MARTÍNEZ
CONTRALOR ELECTORAL

15 DE JUNIO DE 2017



**Memorial Explicativo
Presupuesto 2017-2018
15 de junio de 2017**

Introducción

Este Memorial Explicativo tiene el propósito de exponer y justificar el presupuesto de la Oficina del Contralor Electoral para el año fiscal que se inicia el 1ro de julio de 2017 y termina el 30 de junio de 2018.

La Oficina del Contralor Electoral (en adelante "Oficina"), fue creada el 18 de noviembre de 2011, en virtud de la Ley 222-2011, conocida como, "Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico" (en adelante "Ley 222-2011"). Esta Ley establece el marco legal y administrativo aplicable a la fiscalización de los donativos obtenidos y gastos incurridos con fines electorales por los partidos políticos, aspirantes, candidatos y los diferentes comités regulados por la Ley, asignando dicha encomienda a la Junta de Contralores Electorales, representada por el Contralor Electoral. La Ley 222-2011 define las funciones, facultades y obligaciones de cada uno de los componentes de la Oficina, provee el marco general para su organización y la toma de decisiones, así como los mecanismos de revisión judicial de las determinaciones que se emitan.

El presupuesto de la Oficina es incluido anualmente en la Resolución Conjunta de Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico e ingresa a un fondo especial denominado "Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral". El artículo 3.008 de la Ley 222-2011 establece, en su párrafo segundo que "[l]a Asamblea Legislativa le proveerá anualmente a la Oficina del Contralor Electoral fondos suficientes para su funcionamiento **cualquier remanente al término del año fiscal permanecerá en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral y no revertirá al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.** [...] El presupuesto de la Oficina del Contralor Electoral se contabilizará prioritariamente, según lo solicite el Contralor Electoral. No se podrá invocar disposición de ley general o especial para congelar el presupuesto o cuentas de la Oficina del Contralor Electoral ni para posponer gastos o desembolsos." (Énfasis nuestro).

La Ley 222-2011, con el propósito de salvaguardar la independencia de la Oficina, establece también en su Artículo 3.008 que su presupuesto no deberá ser menor al que rigió para el año fiscal anterior,

excepto que el presupuesto del Gobierno decrezca, donde entonces podrá ser menor, pero proporcionalmente a la contracción presupuestaria. Una disposición similar fue incluida en la Ley 3-2017, mejor conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”.

Sin embargo, a pesar de la letra clara de la Ley 222-2011 que regula el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico y de la Ley 3-2017 que atiende la situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico, la Oficina ha experimentado reducciones continuas y sistemáticas en las asignaciones presupuestarias durante los últimos años fiscales. Desde el primer presupuesto de \$4,879,000 asignado a la Oficina para el año fiscal 2012-2013 hasta el presupuesto del corriente año fiscal 2016-2017, la Oficina ha sufrido una reducción de \$1,309,000 o un 27%. A continuación, un desglose de las asignaciones presupuestarias de la OCE para los pasados años fiscales y para el año fiscal vigente:




Debemos señalar que, a pesar de las disposiciones legales expresas donde se dispone que el presupuesto de la Oficina no podrá ser reducido, la Oficina no solicitó aumentos en los presupuestos pasados recomendados y logró cumplir con sus deberes bajo la Ley 222-2011 y con todas las obligaciones contraídas. Lo anterior fue posible gracias a las economías generadas por utilizar de manera prudente las asignaciones recibidas para la creación de la Oficina.

Por ejemplo, para el corriente año fiscal 2016-2017, la Oficina proyectó un gasto consolidado de \$3,897,308, mientras la asignación presupuestaria fue de \$3,570,000. La diferencia de \$327,308 fue sufragada con las economías acumuladas de años anteriores. Estas economías sufragaron las partidas presupuestarias para las que la OGP no hizo asignaciones, entre estas:

- ✓ Facilidades y pagos por servicios como telefonía, internet y energía eléctrica.

- ✓ Servicios comprados incluyendo mantenimiento de equipo, mantenimiento a/c, arrendamiento, licencias, franqueo.
- ✓ Servicios profesionales, incluyendo servicios legales, servicios de contabilidad, servicios profesionales y consultivos en sistemas de información, mantenimiento de sistemas de radicación electrónica de informes financieros de los candidatos y partidos políticos.
- ✓ Materiales y efectos de oficina.
- ✓ Anuncios educativos, celebración de vistas administrativas.
- ✓ Gastos asociados al cumplimiento con sus deberes bajo la Ley 7-2017, que autorizó la consulta de estatus, para los que no se asignó partida presupuestaria alguna.

Para el próximo año fiscal 2017-2018, luego de hacer un análisis responsable y ajustar las distintas partidas y responsabilidades, determinamos que el presupuesto mínimo con el que la Oficina podrá operar es \$3,900,000. Sin embargo, la asignación presupuestaria recomendada para el año Fiscal 2017-2018 es de \$2,913,000, lo cual representa una reducción de \$657,000 o su equivalente 18% en comparación con el presupuesto asignado para el año fiscal 2016-2017 y una reducción en comparación con el presupuesto inicial de \$1,966,00 o su equivalente 40%.

 Si el presupuesto de la Oficina, recibe un ajuste adicional por parte de la Asamblea Legislativa, la agencia operaría de forma limitada, lo cual le impediría cumplir a cabalidad con sus deberes ministeriales, viéndose obligada a realizar una reestructuración de personal a corto y mediano plazo. Ello inevitablemente provocaría que se debilite el plan de fiscalización establecido, que incluye la meta de realizar las 954 auditorías relacionadas a los comicios del año electoral 2016, y limitaría nuestra capacidad de cumplir adecuadamente con las demás obligaciones de fiscalización y cumplimiento según la encomienda legislativa.

En atención a lo anterior, y utilizándolo como marco de referencia, sometemos el presente memoria! explicativo sobre los gastos funcionales de la Oficina del Contralor Electoral para el año fiscal 2017-2018.

I. Situación Operacional y Fiscal de la Agencia

A. Año Fiscal 2013-2014

Resumen de la situación operacional y programática

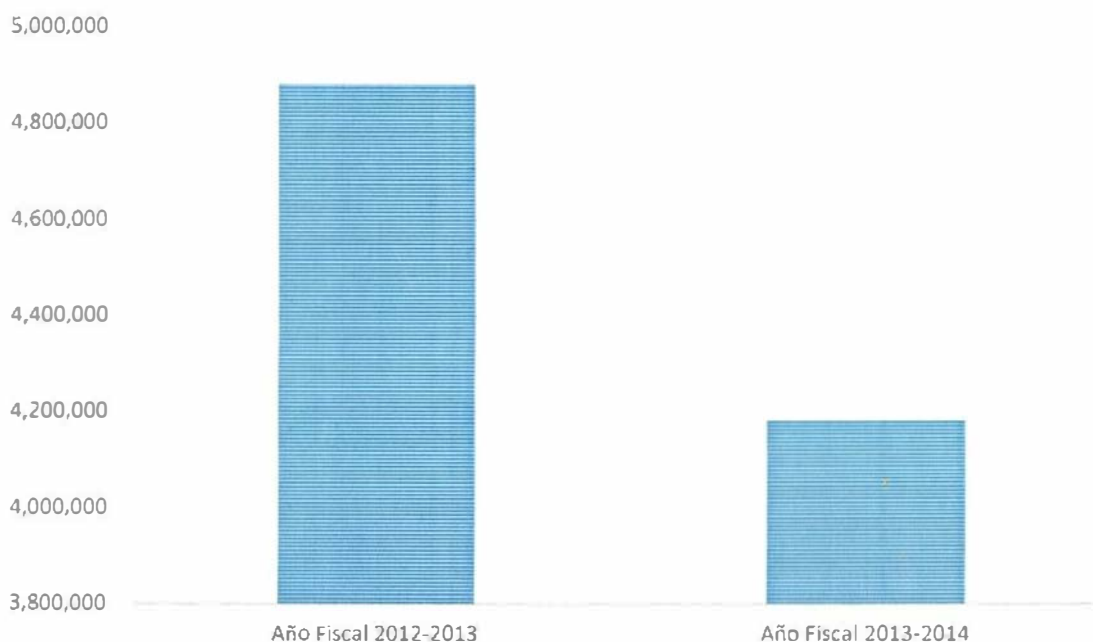
El año fiscal 2013-2014, fue el segundo año de operación de la Oficina que, aunque fue creada mediante legislación en el 18 de noviembre de 2011, no fue sino hasta el 9 de marzo de 2012 que juramentó a su cargo el primer Contralor Electoral. En dicho periodo se implementó por primera vez el Sistema de Radicación Electrónica de Informes (conocido como "REI"), el cual permite a los aspirantes, candidatos, partidos políticos, comités y medios de comunicación presentar los informes requeridos a través de una plataforma digital, en cumplimiento con la Ley 222-2011. Además, se

aprobó la reglamentación administrativa que regiría el ciclo electoral promulgando, 17 Órdenes Administrativas, 6 Cartas Circulares, 3 Reglamentos y 1 Boletín Informativo.

En dicho periodo se estableció una política de orientación y prevención. A pesar de que nuestra función principal es fiscalizadora, se orientó a más de 400 personas sobre el cumplimiento con la Ley 222-2011, ya que la educación es fundamental para promover el cumplimiento. Así, la Oficina se convirtió en un ente de apoyo para que los partidos, candidatos y aspirantes a puestos electivos manejaran una campaña financiada con total transparencia de acuerdo a las mejores prácticas en la administración de los recursos económicos. Además, se desarrolló un nuevo y rediseñado portal de internet que puso al alcance de los candidatos, aspirantes, tesoreros, partidos, donantes, medios de comunicación y el público en general, las guías y reglamentos que implementa la Oficina para que el pueblo pueda conocer quiénes contribuyen a las campañas políticas que pretenden influenciar a los electores, lo cual permite, a su vez, que el pueblo pueda ejercer su derecho al voto debidamente informado.

Asimismo, se iniciaron, completaron y entregaron los borradores de sus auditorías a los partidos políticos y candidatos a la gobernación del proceso electoral de 2012 y se inició la auditoría de treinta candidaturas y sus comités municipales, para un total 161 auditorías. Esta cantidad de auditorías contrasta con las 12 llevadas a cabo por nuestra predecesora Oficina del Auditor Electoral, adscrita a la Comisión Estatal de Elecciones, para el evento electoral del año 2008. Igualmente, se comenzó con la preparación de la auditoría del Fondo Electoral asignado a los partidos políticos, examen que se realizó por primera vez en la historia de este tipo de oficina de fiscalización de financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico.

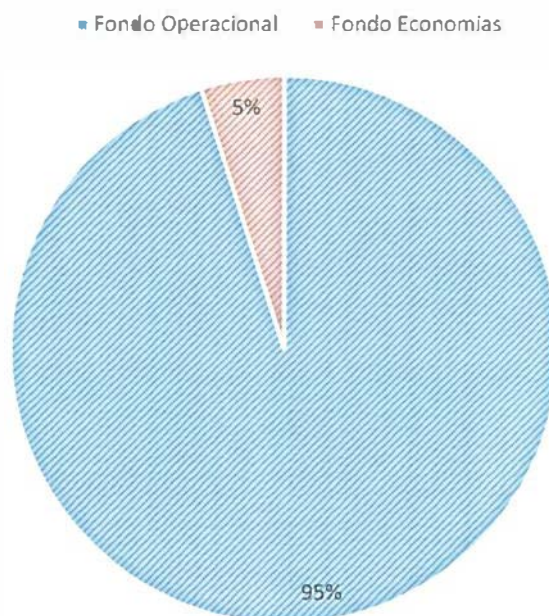
El presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el año fiscal 2013-2014 fue de \$4,179,000, lo cual representó una reducción de \$700,000 o un 14.35% con relación a los fondos asignados para el año fiscal 2012-2013, que ascendieron a \$4,879,000. La grafica muestra una ilustración de las asignaciones presupuestarias de los años fiscales detallados.



Pese a estas reducciones en el presupuesto, la Oficina pudo mantener sus operaciones de forma efectiva gracias a una evaluación continua de sus necesidades, una política de control de gastos, el reclutamiento cuidadoso de capital humano manteniendo la nómina al mínimo necesario para sus operaciones y un plan de adiestramiento a los recursos humanos para lograr que cada miembro del equipo de personal pudiera ejercer diversas funciones logrando un capital humano multifuncional.

Situación presupuestaria al cierre del año fiscal 2013-2014

En el año fiscal 2013-2014, se realizó una reestructuración y consolidación del Área de Administración, Finanzas y Presupuesto con el Área de Recursos Humanos para reducir la burocracia administrativa y hacer más eficiente la administración del presupuesto y la prestación de servicios a la clientela, así como para reducir costos ante la crisis fiscal y reducción presupuestaria que enfrentaba y continúa enfrentando el Gobierno de Puerto Rico. Esta y otras estrategias, así como a la disponibilidad de economías de años fiscales anteriores, permitieron que, pese a las reducciones en las asignaciones del presupuesto, la Oficina mantuviera una operación ininterrumpida. Aún con las medidas tomadas, el gasto funcional para el año fiscal 2013-2014 fue de \$4,386,012. En la gráfica que se presenta a continuación se ilustra el gasto operacional y la procedencia de los fondos que lo cubrieron.



Año Fiscal 2015-2016

Resumen de la situación operacional y programática

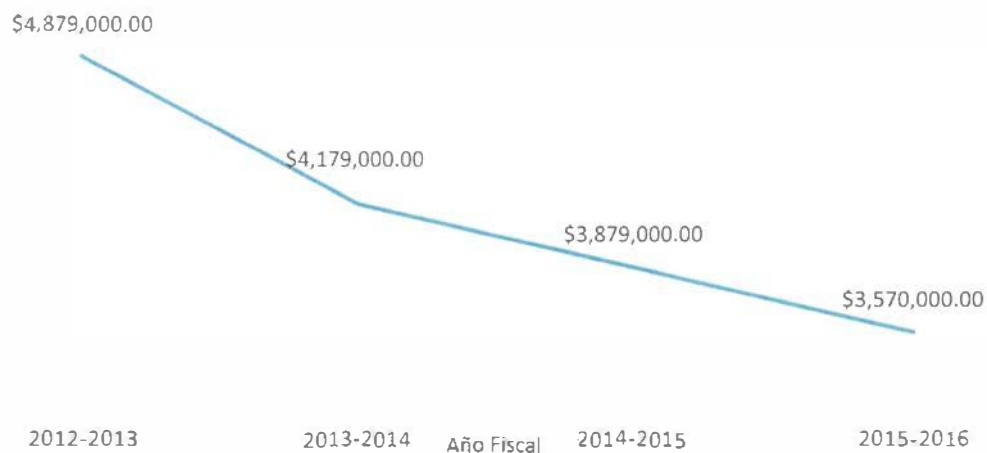
Durante el año fiscal 2015-2016, la Oficina se encontraba inmersa en la preparación para los eventos electorales del año 2016. Como parte de las gestiones realizadas en dicho periodo se adiestraron 2,871 oficiales electos, aspirantes, candidatos, tesoreros y otro personal de los comités y partidos políticos, así como agencias de publicidad, productores independientes y medios de comunicación. De estos, se

adiestraron 632 en el uso de la plataforma de radicación electrónica de informes financieros sobre financiamiento de campañas políticas y 2,239 sobre las disposiciones de la Ley 222-2011. Estos adiestramientos permitieron aumentar a 94% el porcentaje de radicación de informes financieros presentados por los aspirantes, candidatos, oficiales electos, comités y partidos políticos. Además, se complementó la revisión de informes con 17 inspecciones oculares en las que se cubrieron todos los pueblos de la isla, a través de un programa de visitas a los Municipios y Distritos Electorales, logrando una fiscalización proactiva del financiamiento de las campañas políticas.

Igualmente, se fortaleció la revisión y monitoreo de perfiles públicos en las redes sociales para identificar actividades y gastos de campaña política no reportados a la Oficina, logrando la detección y registro de 48 aspirantes a puestos electivos que hacían gastos de campaña y recaudaban donativos sin cumplir con lo requerido por la Ley 222-2011. Además, se logró la revisión completa de los 5,407 informes radicados durante el año fiscal y, como consecuencia, se emitieron avisos de orientación y requerimientos de información requiriendo la corrección de deficiencias en los informes de ingresos y gastos presentados. Además, se radicaron recursos en los tribunales para exigir el cumplimiento con requerimientos administrativos de la Oficina. Igualmente, durante ese año se registró un aumento en la cantidad de comités registrados, para un total de 1,739, así como un aumento en la radicación e investigación de querellas sobre aspirantes a puestos electivos por alegadas violaciones a la Ley 222-2011.

De igual forma, se actualizó la programación del sistema electrónico de radicación de informes financiero de los candidatos a puestos electivos y los partidos políticos para conformarlo a las enmiendas a la Ley 222-2011 adoptadas en la Ley 233-2014.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2015-2016 fue de \$3,570,000, lo que representó una nueva reducción, que en el acumulado representa \$1,309,000 o un 27% en comparación con el presupuesto inicial asignado para el año fiscal 2012-2013, que fue por la suma de \$4,879,000. La gráfica muestra la reducción continua y sistemática del presupuesto de la OCE.

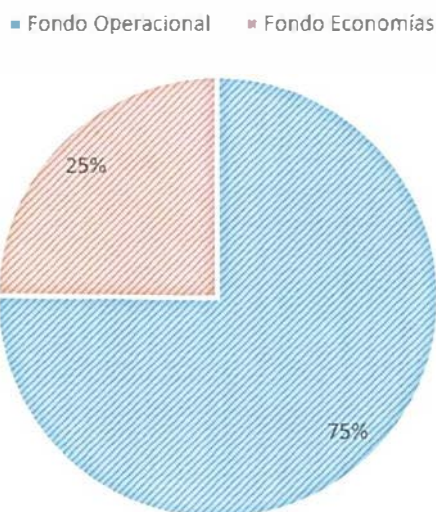


Situación presupuestaria al cierre del año fiscal 2015-2016

A pesar de que la Oficina está **expresamente excluida de las disposiciones de la Ley 66-2014, conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”**, que fue una predecesora de la Ley 3-2017, conscientes de la situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, se continuaron realizando distintas gestiones afirmativas para reducir gastos operacionales. Entre estas medidas se destacan las siguientes:

1. Suspensión de todos los viajes a los Estados Unidos continentales y al exterior.
2. Se paralizó la adquisición de vehículos para ahorrar en costo de las unidades, mantenimiento y combustible.
3. Reducción del salario pagado a empleados de nuevo reclutamiento en comparación con el empleado que ocupaba el mismo puesto anteriormente.
4. Consolidación de la División de Auditoria generando economías en salarios de personal de supervisión al eliminar dos puestos. Reducción en el número y la cantidad presupuestada para servicios profesionales contratados.
5. Reducción en el número de días a ser pagados del total acumulado en exceso por enfermedad y vacaciones.
6. Limitación del reclutamiento de nuevo personal al área de fiscalización y congelación del reclutamiento de personal administrativo.

Gracias a esta disciplina fiscal y a las economías generadas en años fiscales anteriores, la OCE pudo absorber la reducción en presupuesto y el costo operacional de las enmiendas a la Ley 222-2011 relacionadas a la reestructuración de la agencia y la creación de la Junta de Contralores Electorales. Aún con las medidas de reducción de gastos tomadas, el gasto funcional para el año fiscal 2015-2016 fue de \$4,336,959.99, lo cual es mayor que la asignación presupuestaria para ese año. La gráfica a continuación ilustra el gasto operacional y la procedencia de los fondos que lo cubrieron.



Detalle de las cuentas por pagar y por cobrar al 30 de junio de 2016.


La Oficina no tenía cuentas por pagar al 30 de junio de 2016. En términos de las cuentas por cobrar, la totalidad correspondía a multas administrativas impuestas por infracciones a la Ley 222-2011 ascendentes a \$278,463.45. El monto de las cuentas por cobrar que se logren liquidar no ingresa al fondo especial de la Oficina, sino que se remite al Departamento de Hacienda para nutrir el Fondo Electoral para Gastos Administrativos de los partidos políticos y el Fondo Especial para Gastos de Campañas Políticas, en año electoral, que es utilizado por los partidos políticos y su candidato a gobernador o candidatos independientes para sufragar gastos de campaña.

Logros, programas especiales, iniciativas y compromisos programáticos encomendados y atendidos por la Oficina del Contralor Electoral

La agencia ha mantenido un record de logros importantes en sus operaciones. Durante sus seis (6) años de existencia ha logrado establecer una estructura eficiente, entre cuyos éxitos se destacan los siguientes:



1. Implementación de un sistema en línea para la Radicación Electrónica de Informes sobre el financiamiento de las campañas políticas.
2. Acceso en línea a la información sobre el financiamiento de campañas políticas, el cual permite a los votantes la búsqueda de información sobre donantes, ingresos y gastos. Esta herramienta también facilita y promueve el acceso a la información por los medios de comunicación masiva al igual que promueve la fiscalización entre los propios partidos políticos y comités adversarios en procesos electorales.
3. Digitalización de todos los expedientes de campañas políticas previas al 2012, los cuales están disponibles al público.
4. Desarrollo de un amplio proceso educativo para los partidos políticos, funcionarios de los comités de candidatos, medios de comunicación, profesionales del área legal, la banca y otras entidades sobre los requisitos que establece Ley 222-2011 sobre el financiamiento de las campañas políticas.
5. Uso de las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, como parte de los esfuerzos de orientación, divulgación y fiscalización de las campañas políticas.
6. Se completó todo el proceso de auditorías a los partidos políticos de la campaña electoral de 2012.

- 
7. Se logró que el 95% de los regulados por la Oficina, incluyendo partidos políticos, comités y candidatos participantes del proceso radiquen al día los informes financieros requeridos, cosa que ocurre por primera vez en los procesos electorarios en Puerto Rico.
 8. Se creó un historial de atención a las querellas radicadas debidamente fundamentadas, realización de investigaciones, vistas administrativas y toma de determinaciones sobre violaciones a la Ley 222 y comunicación mediática de la toma de acciones correctivas en los procesos relativos al financiamiento de las campañas políticas, lo cual brinda credibilidad a la Oficina ante el pueblo, los medios de comunicación y los propios regulados.
 9. Se creó un historial de imposición de multas a aquellos que, aun habiendo recibido orientación y adiestramientos, comenten violaciones a la Ley 222-2011.
 10. Se iniciaron las auditorías de las campañas políticas del proceso electoral del año 2016, el cual que deberá estar completado al 2018.
 11. En colaboración con el Centro de Innovación Social adscrito a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, se logró ofrecer orientaciones y seminarios en vivo, a través del Internet.
 12. Se ofreció orientación a observadores internacionales de las elecciones generales de 2016 en Puerto Rico, sobre el proceso de fiscalización de las campañas políticas, retos y evolución. Esta actividad permitió a la Oficina proyectar su misión y su visión a nivel internacional, como un centro de mejores prácticas en la fiscalización de las campañas políticas en Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina.
 13. La Oficina se afilió al Council on Governmental Ethics Laws (COGEL). Esta organización reúne oficinas de ética y de financiamiento de campañas políticas de Estados Unidos y Canadá. La afiliación a esta organización le permite a la Oficina beneficiarse de la discusión de iniciativas en Estados Unidos, a nivel estatal y en Canadá.
 14. Se firmaron e implantaron varios acuerdos colaborativos que ayudan a la Oficina a expandir y mejorar los servicios brindados a su clientela:
 - ✓ Centro de Innovación Social (OCAM) - 2 Webinar: Ley 222, Auditoría.
 - ✓ Instituto de Estadísticas – Socrata Open Data, permitió hacer disponibles por primera vez los datos de los informes radicados ante la Oficina al público a través del Internet.
 - ✓ Asociación de Radiodifusores (servicio público) - cápsulas y entrevistas; participación en programa “Camino a las urnas”.
 - ✓ WIPR - difusión de cápsulas informativas.
 - ✓ , Tele-Sagrado (Universidad del Sagrado Corazón) - difusión de cápsulas informativas.

Estos logros son importantes porque una fiscalización efectiva de los donativos recibidos y gastos realizados con fines electorales permite prevenir la ocurrencia de corrupción gubernamental por *quid pro quo* a la vez que respeta el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y de asociación y protege la integridad del proceso electoral mediante reglas que aseguren que el financiamiento de las campañas sea uno transparente.

La ciudadanía tiene un interés particular en conocer quién contribuye a las campañas electorales, quién hace las expresiones que intentan influenciarlo y en qué se gasta el dinero recaudado en las campañas, mientras que el Estado tiene que asegurarse que el interés de la ciudadanía no infrinja indebidamente con la libertad de expresión y asociación, la cual, a tenor con nuestros valores constitucionales, debe ser reconocida, respetada, canalizada y protegida. Estos logros permiten la coexistencia de ambos intereses.

B. Año Fiscal 2016-2017

Iniciativas y prioridades durante el año fiscal vigente 2016-2017




Durante el año fiscal 2016-2017, la Oficina ha estado desarrollando las siguientes actividades conforme el plan de metas y objetivos de la agencia, entre los cuales se destacan los siguientes:


1. La mayor y más importante meta de la Oficina para el presente año fiscal y el que se aproxima es la realización de las auditorías correspondientes al periodo eleccionario del año 2016. Dicho proceso tiene una duración de 30 meses, contados a partir del evento electoral, lo que tiene la consecuencia de impactar varios presupuestos y años fiscales. Se proyectan llevar a cabo 954 auditorías que incluyen aspirantes y candidatos a puestos electivos, así como partidos políticos y comités.

Completar con éxito esta meta redundaría en el cabal cumplimiento con el mandato legislativo de fiscalización, a la vez que se realizaría la mayor cantidad de auditorías de un evento electoral en la historia de Puerto Rico, lo cual promovería aún más la transparencia en el financiamiento de las campañas. La siguiente gráfica muestra el número de auditorías realizadas en cada ciclo electoral y la proyectada por la Oficina para el ciclo electoral del 2016.



- 
2. Inicio del desarrollo de una aplicación electrónica para asistir en el diseño y desarrollo de las auditorías, de forma que se realicen de una forma más rápida y eficiente, y para mejorar el proceso de radicación de informes de los candidatos, los partidos y comités bajo la jurisdicción de la Oficina.
 3. Desarrollo y mejoramiento de herramientas para el proceso de auditorías, las cuales permiten generar reportes actualizados con información del sistema de radicación de informes, realizar encuestas electrónicas y hacer el sorteo de auditorías para el ciclo electoral 2016.
 4. Actualización y ampliación del sistema de radicación electrónica de informes financieros de los candidatos, partidos y comités para hacerlo más interactivo, fácil de usar y ampliar el número de transacciones que se pueden efectuar. Se desarrolló una aplicación que permite la carga de datos (*data upload*) de los sistemas de contabilidad a los informes de las agencias y medios de comunicación en REI, lo cual reduce el tiempo y el trabajo en la preparación de informes. Se mantiene en progreso la revisión del sistema para el uso de los tesoreros de los candidatos, partido y comités.
 5. Realización de una campaña de orientación en los medios de comunicación durante el periodo eleccionario sobre sanas prácticas de recaudación y gastos en las campañas políticas. Se generaron cientos de comunicaciones dirigidas a medios de comunicación, agencias de publicidad y productores independientes para orientarlos y requerirles la radicación de informes sobre los servicios prestados a los aspirantes, candidatos y comités.
 6. Continuación del desarrollo de actividades de orientación a los candidatos y oficiales en puestos electivos sobre las disposiciones de la Ley 222-2011, los cuales se modifican según se hacen enmiendas a la Ley. Específicamente, se han diseñado 6 orientaciones, dirigidas a impactar a cientos de aspirantes, candidatos, tesoreros, partidos, comités, medios de comunicación, agencias de publicidad, abogados y público en general. Además, se desarrollaron orientaciones en línea a través de Webinars, lo cual permite llevar la información a una cantidad mayor de personas. A la fecha de este memorial, las orientaciones que ofrecemos relacionadas a las campañas políticas en Puerto Rico son:
 - ✓ Marco general sobre las disposiciones de la Ley 222-2011.
 - ✓ Controles internos en los comités y errores comunes en la radicación de informes de ingresos y gastos.
 - ✓ Taller práctico sobre el Sistema de Radicación Electrónica de Informes de Ingresos y Gastos (REI)
 - ✓ Taller dirigido a los medios de comunicación, agencias de publicidad y productores independientes sobre los servicios prestados relacionados a campañas políticas.
 - ✓ Durante la campaña plebiscitaria se ofreció la orientación sobre el Reglamento Núm. 35 sobre campaña bajo la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico, Ley 7-

2017 y Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, Ley 222-2011.

- ✓ Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas ante las Garantías Constitucionales de Libertad de Expresión y Libertad de Asociación. (Convalidada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como 3 horas de educación continua jurídica)
 - ✓ Orientaciones en la comunidad universitaria sobre el Impacto de los medios de comunicación y el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. Este taller fue ofrecido en conjunto con los comisionados electorales y la presidenta de la CEE.
7. Promover la disolución de los comités de más de 400 aspirantes a puestos electivos que no resultaron favorecidos en los comicios electorales, requerir el cierre de cuentas bancarias, pago de acreedores y devolución de donativos.
 8. Mantener informados mensualmente a los comisionados electorales y secretarios de los principales partidos políticos sobre todas las comunicaciones que la Oficina notifica a los aspirantes, candidatos y comités afiliados a su colectividad.
 -  9. Continuación del proceso de auditoría de financiamiento de campañas políticas con un enfoque más dinámico que incluye un programa de visitas a los municipios y distritos electorales para, el examen y revisión de perfiles públicos en las redes sociales para identificar actividades y gastos de campañas, monitoreo de las actividades de recaudación de fondos y revisión inmediata de los informes financieros radicados, lo cual redundará en una fiscalización proactiva. Específicamente, se celebraron diez (10) inspecciones oculares en las que se recorrieron todos los pueblos de la isla mediante el programa de visitas a los Municipios y Distritos Electorales.
 10. Investigación ágil de las querellas presentadas sobre irregularidades en el financiamiento de las campañas políticas.
 11. Se logró el mejor y más alto por ciento en la historia de Puerto Rico sobre radicación de informes de los aspirantes, candidatos, partidos políticos, comités y medios de comunicación. En el año natural 2016, el promedio de presentación de informes fue de 94.6%.
 12. Se desarrollaron dos (2) investigaciones comprensivas sobre el cumplimiento de los partidos políticos y aspirantes o comités de acción política con la reglamentación y transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
 13. En el periodo fiscal 2016-2017, se han impuesto 279 multas administrativas por infracciones a la Ley 222-2011, que totalizan \$219,460.00.

14. Se ha colaborado de forma continua con agencias estatales y federales en casos relacionados con la fiscalización del uso de fondos públicos y el cumplimiento con la Ley 222-2011.
15. Por primera vez, se refirieron al Departamento de Justicia 20 aspirantes, candidatos o comités que, luego de serle requerido, no radicaron los informes requeridos por Ley. El Departamento de Justicia presentó inicialmente diez (10) acusaciones criminales que incluyeron candidatos y tesoreros, correspondientes a cinco (5) comités. En la etapa preliminar de los procedimientos un Juez determinó causa en todos los casos. En la etapa de juicio, siete (7) acusados se declararon culpables, enfrentándose a las penas criminales y administrativas correspondientes.
16. Se ha trabajado en mantener un plan de evaluación de riesgos que incluye los riesgos financieros y físicos para los activos de la Oficina y medidas para protegerlos en casos de desastres o accidentes. Se expandió el uso del sistema de control de acceso para proteger los activos de la Oficina, así como la evaluación para adquirir un sistema de cámaras de seguridad, cumpliendo con el plan de evaluación de riesgos. Además, se cumplió con la corrección de los hallazgos presentados en el Informe de Evaluación de Riesgos según requerido por el Programa de Controles Internos y Prevención del Contralor de Puerto Rico (PROCIP).
17. Se adoptaron dos Reglamentos que regirán los procesos de auditoría para el ciclo electoral 2017-2020. Además, se adoptaron o enmendaron 8 reglamentos, 21 ordenes administrativas, 11 boletines informativos, 4 cartas circulares, 5 opiniones consultivas y 12 Determinaciones de la Junta de Contralores interpretando o aclarando disposiciones de la Ley 222-2011.
18. Se continuó la evaluación periódica de los procesos administrativos y gerenciales de la Oficina, incluyendo la administración del presupuesto, recursos humanos, propiedad, planta física y seguridad ocupacional para mantenerlos actualizados y operando eficientemente. Además, se realizaron las siguientes tareas:
- ✓ Se inició el proyecto para digitalizar todos los documentos que maneja el área de finanzas y compras de la División de Administración y Recursos Humanos.
 - ✓ Se integraron servicios adicionales de la plataforma Office 365 para beneficio de la Oficina, como *OneDrive for Business* y las aplicaciones relacionadas.
 - ✓ Se desarrolló un Plan de Adiestramientos para la Oficina el cual cubre las necesidades de capacitación de los empleados.
 - ✓ Se logró el cumplimiento de todo el personal con las 20 horas de educación continua requeridas por la Ley de Ética Gubernamental a todos los empleados y funcionarios que laboran en el servicio público.
 - ✓ Se habilitaron dos salones para atender al público. Cada salón cuenta con una Laptop y materiales necesarios para llevar a cabo las reuniones.


19. Se ejecutó un plan para monitorear las prácticas de fiscalización de campañas políticas de otras jurisdicciones y, a su vez, compartir nuestras prácticas, con la aspiración de servir de modelo de las mejores prácticas en las jurisdicciones de Estados Unidos y América Latina.
20. Se orientó a observadores internacionales de las elecciones generales en Puerto Rico sobre el proceso de fiscalización de las campañas políticas, retos y su evolución. Los países participantes incluyeron los siguientes: El Salvador, Ecuador, Perú, Antigua y Barbuda, México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Honduras y Cuba.
21. Se promovió la interacción de la Oficina con los medios de comunicación, incluyendo la prensa escrita, radio, televisión y las redes sociales para mantener informada a la ciudadanía sobre los procesos de financiamiento de las campañas políticas.
22. Se desarrolló reglamentación relacionada al recaudo y uso de fondos privados destinados a la campaña del pasado Plebiscito de Estatus, así como un plan de adiestramientos y campaña en medios de comunicación y redes sociales. Se re diseñó la página web para cumplir con las disposiciones de la Ley 7-2017, la cual, además, requiere que la Oficina haga un proceso adicional de auditorías a los partidos y comités que participaron en la campaña del Plebiscito.
23. Se rediseñó de página web y se publicaron los datos relacionados al financiamiento de las campañas políticas para fomentar el flujo de información a los electores, medios de comunicación, funcionarios electos, aspirantes y candidatos a puestos electivos.
24. Se hicieron recomendaciones para la redacción de proyectos de ley que fueron presentados ante la Asamblea Legislativa para atender aspectos sustantivos de la ley 222 que, a base de nuestra experiencia en la fiscalización de los fondos, deben ser enmendados.
25. Se incorporaron nuevas herramientas digitales para mejorar la fiscalización facilitando la presentación digital de estados bancarios y documentos de apoyo de los informes de ingresos y gastos. En el caso de los donativos, se autorizó la realización de los mismos a través de mecanismos digitales como paypal, tarjetas de débito y crédito, al igual que se autorizó a los comités hacer desembolso con tarjetas de débito, entre otros.
26. Se expandió el manejo y archivo digital de los documentos presentados ante la Oficina, con miras a convertirnos en una dependencia cuyo uso de papel sea mínimo.
27. Se inició la preparación de un nuevo Plan Estratégico para el periodo de 2017 al 2022.

Proyección presupuestaria por origen de recursos para el año fiscal 2016-2017

Para el final del corriente año fiscal 2016-2017, la Oficina proyecta un gasto consolidado de \$3,897,308 mientras que la asignación presupuestaria fue de \$3,570,000. La diferencia de \$327,308, que incluye las partidas presupuestarias para las cuales la OGP no hizo asignaciones, fue sufragada con las economías acumuladas de años anteriores.

A pesar de que la OCE está expresamente excluida de la aplicación de la Ley 3-2017, no está ajena a la realidad que vive el Gobierno de Puerto Rico. Por lo cual, con el interés de establecer una filosofía de responsabilidad fiscal y cumpliendo con los principios de sana administración, la OCE realizó gestiones afirmativas para reducir sus gastos operacionales durante el presente año fiscal.

En particular, el 7 de febrero de 2017 se aprobó la Orden Administrativa OCE-OA-2017-02, para establecer medidas voluntarias de reducción de gastos entre los cuales se encuentran:


- 
1. la **eliminación** de aumentos en beneficios económicos a los empleados, tales como, aumentos en aportaciones patronales para beneficios marginales;
 2. **eliminación** de aumentos en la cuantía del bono de navidad;
 3. **eliminación** de aumentos por concepto de ascenso o traslados, excepto que tal ascenso o traslado resulte en un ahorro neto para la OCE;
 4. **eliminación** de aumentos en salario por condiciones extraordinarias o por interinatos, excepto que dicho diferencial resulte en un ahorro neto para la OCE.
 5. **limitación** de compensación monetaria extraordinaria;
 6. **prohibición** del uso de fondos públicos para pago de viajes, celulares o tarjetas de crédito;
 7. **reducción** del consumo energético;
 8. **control** de gastos administrativos generales como impresión de documentos;
 9. mayor utilización de mensajería electrónica;
 10. Se creó un comité compuesto por empleados de cada una de las dependencias de la oficina para presentar alternativas adicionales de reducción de gastos operacionales.

Además de lo anterior, se proyectan para el cierre del presente año fiscal 2016-2017 los siguientes ahorros en comparación con el año fiscal anterior:

1. Reducción de un veinticinco cinco (25%) por ciento en los gastos en compras, sobrepasando la cifra de cinco (5%) por ciento requerida en la Orden Ejecutiva OE-2007-009;
2. Reducción de treinta y cuatro (34%) por ciento en servicios comprados y profesionales; excediendo la cifra de una reducción de un diez (10%) por ciento sugerida;
3. Reducción de diez (10%) por ciento de la totalidad de los gastos de operaciones de la OCE, cónsono con el por ciento sugerido;
4. Reducción de ocho (8%) por ciento en el consumo energético, logrando una reducción mayor al cinco (5%) por ciento sugerido, lo que redunda en un ahorro de un catorce (14%) por ciento en el desembolso por dicho concepto. Además, se trabaja en la elaboración de un Plan para la Conservación y Eficiencia Energética en coordinación con la Oficina Estatal de Política Pública Energética;

5. Reevaluación del plan de vacaciones logrando que el exceso generado durante el pasado año fiscal sea disfrutado dentro de los primeros seis (6) meses del año en curso y que, al concluir el primer semestre del próximo año fiscal, ningún empleado tenga días de vacaciones en exceso;
6. No se ha autorizado la creación de puestos adicionales dentro del Índice Esquemático de Puestos de la OCE, para evitar nuevos nombramientos con impacto presupuestario.

La Oficina tiene el compromiso de ser partícipe de la política pública de responsabilidad fiscal, por lo que hemos tomado y tomaremos las medidas necesarias para continuar ahorrando y disminuyendo gastos operacionales. Sin embargo, es necesario puntualizar que las partidas señaladas en las cuales hubo reducción **no** se traducen en fondos disponibles o sobrantes, ya que en el ejercicio de distribución de fondos por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Asamblea Legislativa para las operaciones de la Oficina durante el año 2016-2017 se ha materializado una reducción equivalente a 27% en comparación con el presupuesto otorgado en el año 2012, fecha en la cual comenzó a operar la Oficina.



El costo operacional de la Oficina ha sido reducido de \$4,879,000 anuales a \$3,897,308, lo cual representa una diferencia de 20%. Aun así, la asignación presupuestaria para el año fiscal corriente es de \$3,570,000.00, por lo que la OCE recibió una asignación con **\$600,000 menos** que su necesidad operacional. A pesar de lo anterior, y debido a que consistentemente hemos sido prudentes en el uso de los fondos asignados acumulando economías de presupuestos anteriores, este año fiscal la Oficina pudo solventar todos los compromisos, así como las metas institucionales sin afectar la fiscalización adecuada de las campañas políticas.

Sin embargo, si para el Año Fiscal 2017-2018 hubiera una reducción adicional, sobre los \$3,570,000.00 asignados actualmente, la Oficina tendría que realizar un proceso de reestructuración de sus recursos humanos, pues el 79% del presupuesto de \$3,570,000.00 es utilizado para sufragar el costo de la nómina. Una reestructuración de personal tendría un impacto negativo en el cumplimiento con la responsabilidad delegada por la Asamblea Legislativa para realizar las auditorías de los gastos de financiamiento de las campañas políticas.

En atención a lo anterior detallamos la proyección presupuestaria por origen de recursos para el año fiscal 2016-2017.

Nómina y Costos Relacionados	\$2,947,562.63
Servicios Públicos	\$ 164,120.38
Servicios Comprados	\$ 377,756.98
Sentencias e Indemnizaciones	\$ 40,000.00
Gastos de Transportación	\$ 6,990.30
Servicios Profesionales	\$ 246,968.75
Otros Gastos	\$ 7,293.74
Materiales y Suministros	\$ 32,060.96

Compra de Equipo	\$ 7,422.95
Anuncios y Pautas en Medios	\$ 67,131.87
Total Presupuesto Solicitado	\$53,897,308.56

En el presupuesto presentado no se incluye el costo del Sub Contralor Electoral, puesto que no es actualmente ocupado en propiedad y que tiene un costo de nómina de \$138,566.40.

Deudas y cuentas por cobrar estimadas al 30 de junio de 2017

La Oficina proyecta que no tendrá cuentas por pagar al 30 de junio de 2017. En términos de las cuentas por cobrar, se prevé que la totalidad responderán a multas administrativas por infracciones a la Ley 222-2011, las cuales se proyecta que incrementarán en \$170,459.56. El monto de las cuentas por cobrar no ingresa al Fondo Especial de la Oficina, sino que se remite al Departamento de Hacienda para nutrir el Fondo Electoral para Gastos Administrativos de los partidos políticos y el Fondo Especial para Gastos de Campañas Políticas, en año electoral, que es utilizado por los partidos políticos y su candidato a gobernador o candidatos independientes para sufragar gastos de campaña.



II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2017-2018

A. Presupuesto Funcional del Fondo General


Justificación de la Resolución Conjunta del Presupuesto General

Como hemos expresado anteriormente, el costo proyectado para mantener los programas operacionales de la agencia es de \$3,900,00. No obstante, en esta proyección **no** se incluye el costo del puesto del Sub Contralor, el cual actualmente es ocupado por un funcionario de la Oficina que fue designado al puesto interinamente, lo cual equivale a \$138,566.40.

Como se puede observar, a pesar de una disciplina fiscal y reducción considerable en los gastos operacionales, las obligaciones económicas limitan la capacidad de la Oficina de operar eficientemente con una asignación menor a los gastos. Si se toman en consideración las reducciones continuas de presupuesto que ha experimentado la Oficina desde su creación, el presupuesto recomendado de \$2,913,000 representa una reducción global de **40.35%** en relación con la asignación inicial del año fiscal 2012, mientras que constituiría una merma de **18.4%** con relación al presupuesto vigente. Se ilustra en la gráfica las reducciones en presupuesto que ha experimentado la Oficina desde su presupuesto inicial hasta el recomendado para el próximo año fiscal.

De prevalecer el presupuesto recomendado, la Oficina tendría que recortar gastos por la suma insostenible de \$1,187,000. Como hemos establecido anteriormente la Oficina ha tomado las medidas necesarias para mantener sus operaciones en un alto nivel de calidad, aun con los recortes anuales. Sin embargo, no es posible recortar una suma de la magnitud que se plantea sin despedir empleados,

eliminar servicios profesionales necesarios¹ y reducir espacio físico para ahorrar en renta y costo de energía. La OCE se vería forzada a tomar en consideración las siguientes medidas:

- 
1. Renegociar el contrato de arrendamiento para entregar la mitad del espacio físico actual e intentar acomodar un menor número de empleados en un espacio reducido, restructurando la distribución de las facilidades e incurriendo en costos de remodelación de facilidades que pueden representar una suma que estimamos en no menos de \$150,000. De esta manera se ahorraría alrededor de \$166,000, pero se incurriría en gastos de restructuración el primer año por una suma mayor al ahorro en renta y energía.
 2. Reducción del costo de nómina - Alternativa I: Reestructuración de los recursos humanos de la agencia mediante **terminación de empleos**, que ocurriría mayormente en el área de auditoría, que lleva a cabo la función principal de la encomienda legislativa. Esta división tiene 24 auditores y 1 asistente administrativo. Además, se evaluaría una reclasificación de salarios ya existentes, tomando en cuenta lo siguiente.
 - a. No es posible reducir el número de empleados actuales en la División de Administración y Recursos Humanos, que tiene 8 empleados, debido a las restricciones que imponen la reglamentación del Departamento de Hacienda y del Contralor de Puerto Rico para mantener la separación de funciones en los procesos fiscales con el fin de evitar la comisión de irregularidades en el uso de fondos públicos.
 - b. En la División de Secretaria, que es una función vital, requerida por la Ley 222-2011, hay tan solo 7 empleados.
 - c. En la División de Asuntos Legales, que es responsable de atender los procesos de querellas, reglamentación, vistas administrativas y de cumplimiento con las disposiciones de la Ley 222 hay solo 5 empleados.
 - d. En la División de Apoyo Tecnológico, responsable de mantener los procesos de radicación electrónica de los informes de financiamiento de las campañas políticas, un requisito medular de la Ley 222-2011, hay solo 4 empleados.
 - e. Los restantes 5 empleados son el Contralor Electoral, el Sub Contralor Electoral Interino (que es a su vez el director de la División de Auditoría) y sus respectivos asistentes administrativos.
 3. Reducción del costo de nómina - Alternativa II: Implantar una reducción de jornada laboral, de cuatro días a la semana, combinada con un programa más limitado de reestructuración de personal hasta lograr la reducción en gastos necesaria para alcanzar la disminución de \$1,187,000. Una reducción de jornada laboral, sin embargo, no permite reducir el espacio físico para ahorrar en el pago de renta y utilidades, principalmente costos de energía eléctrica.

¹ Por estar inmersos en el proceso de auditoría se debe garantizar los derechos de los auditados y atender cualquier pedido de un proceso adjudicativo, que debe ser llevado a cabo por un Oficial Examinador Externo, con este recorte no contaríamos con recursos suficientes para brindar las vistas administrativas.

La implementación de las medidas esbozadas y la reducción de empleados afectaría el cumplimiento con la responsabilidad delegada por la Asamblea Legislativa para realizar las auditorías de los gastos sobre el financiamiento de las campañas políticas, lesionando de esta manera la transparencia que se quiere lograr en el uso de los donativos políticos a los partidos, candidatos y comités de acción política.


Además, debe tomarse en consideración lo siguiente:

1. El puesto de Sub Contralor está vacante, por lo que el salario a devengar por este funcionario ha supuesto un ahorro para las arcas de la Oficina. El sueldo a devengar por dicho funcionario es de \$138,566.40.
2. La Oficina ha podido lidiar con la disminución constante de su presupuesto ya que, en años anteriores, mediante las iniciativas de control de gastos implementadas se generaron economías que ayudaron a absolver la deficiencia de presupuesto para su funcionamiento. Sin embargo, los balances de estas economías no son recurrentes y se agotan solventando las responsabilidades no cubiertas con las asignaciones presupuestarias aprobadas.
3. Durante el año fiscal 2016-2017, se aprobó la Ley 7-2017 conocida como "Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico". Esta pieza legislativa nos requirió llevar a cabo procesos adicionales de orientación y fiscalización de las campañas para la consulta del estatus político. Nuestra Oficina cumplió con su deber ministerial de orientar a la ciudadanía, agrupaciones de ciudadanos y partidos políticos a través de los mecanismos disponibles. Sin embargo, la Ley 7-2017 no asignó fondos para estos procesos, por lo que el costo de este esfuerzo fue asumido en su totalidad con el presupuesto asignado para el presente año fiscal.

Detalle de las metas para el año fiscal 2017-2018

Para el año fiscal 2017-2018, la Oficina tiene proyectado desarrollar las siguientes actividades conforme el Plan Estratégico de metas y objetivos de la agencia:

1. Continuar con las auditorías del periodo electoral del año 2016 que comenzó luego de las elecciones generales y tiene una duración de 30 meses. Este proceso impacta la totalidad del término de la asignación presupuestaria.
2. Continuar desarrollando una aplicación electrónica para el diseño y desarrollo de las auditorías, que redunde en un proceso más rápido y eficiente, y que mejore el proceso de radicación de informes de los candidatos y los partidos y organizaciones.
3. Actualizar y ampliar el sistema computadorizado de radicación electrónica de informes financieros por los candidatos, los partidos y comités para hacerlo más interactivo, ágil y más amplio en el número de transacciones que se pueden efectuar.

- 
4. Continuar el desarrollo de actividades de orientación a los comités políticos, candidatos, oficiales en puestos electivos, medios de comunicación y profesionales sobre el desarrollo del financiamiento en las campañas políticas.
 5. Dirigir el proceso de evaluación de fondos manejados en los procesos de campaña política hacia mecanismos más dinámicos mediante visitas a los municipios y distritos electorales para una fiscalización proactiva del financiamiento de las campañas, monitoreo constante de los perfiles públicos en las redes sociales para identificar actividades y gastos de campañas, así como actividades de recaudación de fondos y revisión inmediata de los informes financieros radicados.
 6. Revisión constante de los planes de evaluación de riesgos a los fines de minimizar los riesgos financieros y físicos para los activos de la Oficina y desarrollar medidas para protegerlos en casos de desastres o accidentes.
 7. Continuar la evaluación periódica de los procesos administrativos y gerenciales de la Oficina, incluyendo la administración del presupuesto, recursos humanos, propiedad, planta física y seguridad ocupacional para mantenerlos actualizados y operando de manera eficiente.
 8. Establecer un plan para examinar las prácticas de fiscalización de campañas políticas de otras jurisdicciones y compartir nuestras prácticas con la aspiración de servir de modelo de las mejores prácticas en las jurisdicciones de Estados Unidos y América Latina.
 9. Promover la interacción con los medios de comunicación, incluyendo la prensa escrita, radio, televisión y las redes sociales para mantener informada a la ciudadanía sobre los procesos de financiamiento de las campañas políticas, promoviendo la transparencia y el acceso a la información necesaria en los procesos democráticos de eventos electorales.

Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

La Oficina no cuenta con asignaciones especiales para gastos de funcionamiento. Sin embargo, de entender esta Asamblea Legislativa que mediante una asignación especial se pudieran solventar algunos de las partidas no cubiertas por la asignación del Fondo General estaríamos disponibles para explicar el detalle de su utilización.

Demandas con Sentencias

La Oficina no tiene demandas con sentencias pendientes de pago.

Gastos Ineludibles

Detallar los gastos ineludibles de su agencia para el año fiscal 2017-2018.

Nómina y Costos Relacionados	\$3,086,129.00
Servicios Públicos	\$ 164,120.38
Servicios Comprados	\$ 377,756.98
Sentencias e Indemnizaciones	\$ 40,000.00
Gastos de Transportación	\$ 6,990.30
Servicios Profesionales	\$ 246,968.75
Otros Gastos	\$ 7,258.74
Materiales y Suministros	\$ 32,060.96
Compra de Equipo	\$ 7,422.95
Anuncios y Pautas en Medios	\$ 67,131.87
Total Presupuesto Solicitado	\$3,897,308.56

B. Fondos Federales

La agencia no recibe fondos federales.

C. Fondos Estatales Especiales

El artículo 3.015 de la Ley 222 crea el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral estableciendo que "[t]odos los cargos, derechos, o pagos recibidos por la Oficina del Contralor Electoral, establecidos en esta Ley, ingresarán al Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral. Asimismo, ingresarán al Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral las contribuciones anónimas en exceso del límite establecido."

Por su parte el artículo 3.008 de la Ley 222 establece sobre el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral lo siguiente, "[t]odos los dineros que reciba la Oficina del Contralor Electoral en el cumplimiento de su tarea de implantar las disposiciones de esta Ley, de las fuentes que se especifiquen en esta Ley y de cualesquiera otras fuentes, ingresarán en un Fondo Especial que se denominará "Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral"[...]. La Asamblea Legislativa le proveerá anualmente a la Oficina del Contralor Electoral fondos suficientes para su funcionamiento cualquier remanente al término del año fiscal permanecerá en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral y no revertirá al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. [...]."

Esto significa que al cierre de cada año fiscal los balances no obligados se transfieren al Fondo Especial de la Oficina. Este proceso se tramita a través de jornales de transferencia de saldo libre preparados por la oficina de contabilidad central del Departamento de Hacienda.

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

A pesar de que la Oficina no genera sus propios ingresos, ya que no cobra cuotas, certificaciones o licencias, en la implantación de la Ley 222-2011 se han cobrado multas administrativas por infracciones a la Ley 222-2011, según detallado anteriormente. Sin embargo, el monto de dichas partidas no

ingresa al Fondo Especial de la Oficina, sino que se remite al Departamento de Hacienda para nutrir el Fondo Electoral para Gastos Administrativos de los partidos políticos y el Fondo Especial para Gastos de Campañas Políticas que en año electoral es utilizado por los partidos políticos y su candidato a gobernador o candidatos independientes para sufragar gastos de campaña.

III. Programa de Mejoras Permanentes

No contamos con asignación para programas de programas permanentes.

IV. Asuntos generales

Nómina

El costo de nómina estimado al 30 de junio de 2017 es de \$2,947,552. El desglose del origen de recursos es el siguiente:

Fondo General: \$ 2,818,158

Fondo Economías: \$ 129,404

Total consolidado: \$ 2,947,562



El costo de nómina proyectado para el año fiscal 2018 es el siguientes:

Fondo General: \$ 2,902,988

Total consolidado: \$ 2,902,988

Véase anejo 1

Relación de puestos ocupados

La cantidad de puesto ocupados al 30 de mayo de 2016 es de 55 empleados, en la categoría de confianza, sufragados por el Fondo General. Al 30 de mayo de 2017, la cantidad de empleados asciende a 54, en la categoría de confianza, sufragados del mismo origen de recursos.

Véase anejo 2.

Contratos

El total de contratos para el año fiscal 2016-2017 es de \$993,960, los cuales se sufragan de los siguientes orígenes de recursos:

Fondo General: \$ 723,348


Fondo Economías: \$ 270,612

Total consolidado: \$ 993,960

Esta partida de contratos incluye aquellos formalizados durante el año fiscal corriente 2016-2017 y contratos multianuales otorgados en años previos que impactan la asignación presupuestara. Véase anejo 3.

V. Conclusión

La Oficina del Contralor Electoral regula y fiscaliza el financiamiento de las campañas políticas, conforme a los parámetros establecidos en la ley orgánica y viabilizando un campo nivelado, equitativo e imparcial, para que los partidos políticos, aspirantes y candidatos a puestos electivos lleven a cabo su campaña electoral de una manera honesta y transparente. Al mantener un control del dinero que entra y sale de las campañas políticas se reduce la posibilidad de ingresar desmedidamente a ellas dineros o recursos de personas afluentes, corporaciones, bancos u otras instituciones, que pudiesen ejercer una influencia indebida en el proceso electoral de un país y obtener beneficios de actos oficiales a cambio de sus donativos.



La Oficina le garantiza al ciudadano su derecho al acceso a la información, al publicar el detalle de los fondos manejados en las campañas políticas. La publicación es un acto de gran envergadura, ya que le provee al ciudadano una información esencial para poder tomar una decisión informada al emitir su voto y, a su vez, le garantiza a todo ciudadano que done a estas campañas que ese dinero, que constituye una expresión de apoyo, será utilizado para la campaña política y no para beneficio personal. De igual forma, la Oficina vela por que los derechos constitucionales de libre expresión y libre asociación no sean interferidos más allá de los contornos permitidos por la Ley y la jurisprudencia estatal y federal.

La función de la Oficina no se limita exclusivamente al evento electoral, al mantener controles sobre las finanzas de las campañas electorales, el gobierno y sus funcionarios, podrán ejercer su rol de una manera neutral, en su forma más pura, gobernando por un pueblo y para todo un pueblo, no necesariamente para quienes aportaron en mayor proporción a sus campañas electorales. Las regulaciones adoptadas en la Ley 222-2011 evitan que la gobernanza de Puerto Rico esté a la venta, como un mero bien del comercio. La Oficina, por ende, aporta para que el Gobierno de Puerto Rico cumpla cabalmente con los deberes ministeriales delegados por la Constitución y las Leyes en beneficio de todos los puertorriqueños.

En términos del presupuesto que esta Honorable Asamblea Legislativa tiene a su bien evaluar, deseamos puntualizar que la Oficina ha mantenido los gastos dentro de los parámetros de los fondos asignados y el fondo de economías de años anteriores, conforme refleja la información que estamos presentando a esta Comisión. El presupuesto es administrado de forma tal que sus gastos y obligaciones se cubran con el fondo asignado para el presente año fiscal y el fondo de economías. Al día de hoy todos los pagos a los proveedores de la Oficina se han realizado, así como los que tenemos

que realizar a otras dependencias gubernamentales. Entendiendo la situación fiscal por la que atraviesa nuestro gobierno, mantenemos una revisión constante de todas las partidas de gasto y hemos efectuado los ajustes para reducir aquellas que hemos entendido pertinentes y reasignar esos recursos a otras áreas.

En conclusión, podemos asegurar que los recursos asignados a la Oficina serán administrados de forma responsable, con prudencia y disciplina. Los recursos solicitados son necesarios para la continuidad de las operaciones y seguir proveyendo un servicio de excelencia a nuestros clientes, que son los partidos, candidatos, aspirantes, comités, medios de comunicación y el público en general.

Esperamos que este memorial explicativo le sea de utilidad para los propósitos que es requerido. Estamos disponibles para abundar sobre los temas discutidos y contestar preguntas específicas.

Atentamente,


Walter Vélez Martínez
Contralor Electoral